

LAS TEMPESTADES DE AQUELLOS VIENTOS

La Mejor Defensa. A estas alturas ya no está claro que la mejor defensa de cualquier sistema de gobierno contra la acción de enemigos armados es no disponer de un gran respaldo militar, sino de algo mucho más efectivo que las bayonetas: de la legitimidad. Sólo un sistema de poder que es visto como algo propio y valioso por el grueso de los ciudadanos hará que las estructuras sociales existentes se conviertan en un terreno infértil para aquellos que buscan acabar con el orden político existente por la vía de la acción directa. Un indicador de la aceptación y legitimidad de las autoridades, el gobierno o el régimen, es la presencia o ausencia de movimientos insurgentes o, en caso de que éstos ya existan, la medida en que encuentran o no simpatía en grupos, regiones, instituciones y en la opinión pública en general. Y esto viene a cuento porque hoy, desafortunadamente, a lo acontecido en las cañadas de Chiapas desde 1994 se une lo que hoy sucede en la montaña de Guerrero y en la zona de las Huastecas, donde han vuelto a surgir quienes niegan autoridad moral a las estructuras de poder existentes y están dispuestos a llevar la política a sus últimas consecuencias y declarando la guerra a las autoridades y al régimen político.

La Cosecha. "Quién siembra vientos cosecha tempestades". Pues bien, hay veces que unos son los que siembran los vientos -en

nuestro caso, quienes hoy o de tiempo atrás cerraron las vías pacíficas para las expresiones y demandas de aquellos insatisfechos con el orden de cosas existentes y los reprimieron o defraudaron- y otros son los que tienen que cosechar las tempestades: las comunidades indígenas, los marginados, los estudiantes o, finalmente, la sociedad en su conjunto. Los mexicanos de hoy, en diferentes grados y en contra de nuestra voluntad, somos los cosechadores de los vientos antidemocráticos y de impunidad que desde hace mucho ha venido sembrando una clase política tan corrupta como irresponsable.

La aparición el 1° de enero de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Ejército Popular Revolucionario (EPR) el 28 de junio de este año, son sendas muestras de la crisis del arreglo político existente. ¿Cómo explicar a esos dos nuevos actores políticos que entran armados al escenario político del fin del siglo XX mexicano? Una forma es simplemente la conspiración de fuerzas oscuras, otra es la inmadurez o demencia de un pequeño grupo de radicales, que no se han dado cuenta de que el mundo cambió y que la modernidad mexicana ya no está para recrear el 20 de noviembre de 1910. Sin embargo, hay otra posibilidad: la de la explicación estructural e histórica.

La insurgencia actual puede ser vista como producto de la cerrazón, la codicia, la ausencia de patriotismo y la falta de verdadera inteligencia, de los dirigentes y beneficiarios del

sistema mexicano postrevolucionario. Si bien es cierto que historia y justicia no tienen porque ir de la mano, también lo es que el proceso histórico no es sólo el reino del azar y la impunidad. Algunas decisiones tomadas desde y por el poder hace treinta, veinte u ocho años, y cuyos autores consideraron entonces que sus acciones tendrían un costo nulo o muy bajo, se están pagando hoy. Tal es, entre otros muchos ejemplos, el caso de las represiones y fraudes del presidencialismo intolerante e irresponsable de Díaz Ordaz a Carlos Salinas, de la brutalidad del caciquismo en Guerrero o las Huastecas y de una economía que juega con los dados cargados en contra de los más pobres. Es justamente el costo de políticas y hechos como los anteriores, el que hoy buscan cobrar, equivocadamente o no, los hombres con pasamontañas o paño rojo en el rostro.

La Siembra de los Vientos. La brutal e ilegal represión con que se respondió hace tres decenios a las demandas de apertura política local encabezadas por los profesores guerrerenses Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, la criminalidad respuesta presidencial a las banderas democráticas del movimiento estudiantil del 68, la matanza de campesinos en la Huasteca de Hidalgo en 1977, todas esas acciones y muchas otras parecieron haber tenido un precio inicial muy bajo. En su momento, el uso de la fuerza por la autoridad fue justificada no sólo por sus autores sino también por los medios de comunicación y los líderes corporativos, recurriendo al espíritu conservador y anticomunista de la época. El efecto inmediato de la

persecución y el arresto de Vázquez Rojas en 1966 por dirigir la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en Guerrero, la matanza de manifestantes dirigidos por Lucio Cabañas en Atoyac en mayo de 1967 por policías y pistoleros de caciques, y el asesinato colectivo del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México en Tlatelolco, reforzaron en un primer momento a las estructuras de poder existentes y permitieron que las cosas siguieran más o menos como estaban. Pero hoy sabemos que eso fue sólo apariencia; el descontento político sin salida pacífica hizo que algunos de los afectados se radicalizaran y se decidieran por la lucha armada, tal fue el caso de las guerrillas rurales organizadas por Vázquez, Cabañas y la actividad clandestina urbana de varios grupos de estudiantes en la Ciudad de México y en otros estados de la República.

Fue entonces, en los años setenta, cuando vino la segunda etapa de violencia sin límites de que es capaz un sistema de régimen autoritario cuando se siente desafiado. En efecto, desde la presidencia se buscó el aplastamiento total de los movimientos guerrilleros en las montañas de Guerrero o en las "casas de seguridad" urbanas. De nueva cuenta, la nueva demostración de mano dura por parte de la autoridad no despertó más que protestas marginales en una sociedad todavía muy dominada por el *shock* del 68 y los mecanismos corporativos y autoritarios tradicionales. Al inicio de los ochenta el gobierno, los medios de información y el grueso de la sociedad, volvieron a dar por terminado este triste capítulo de la

violencia política mexicana. Sin embargo, hoy es evidente que no todos los insurgentes fueron eliminados, encarcelados o cooptados, y que algunos de esos cuadros sobrevivientes simplemente aguardaron mejores tiempos para iniciar la tercera ronda de su enfrentamiento con un gobierno para el que no tenían más que rechazo y rencor. Y desafortunadamente resulta que esos tiempos para reemprender la práctica de la política por otros medios -los violentos- son justamente los actuales, resultado de los fraudes electorales sistemáticos de los años ochenta, del fraude selectivo de los noventa y de una política económica que llevó, a la vez, a la concentración de enormes riquezas en unos pocos y a la pérdida de niveles de vida y de expectativas de millones para los que no hubo, no hay ni habrá lugar, en la "economía de mercado" y globalizada que sustituyó al sistema económico estatista y protegido tradicional.

La Oportunidad Perdida. A principios del decenio pasado y frente al derrumbe de la política y la economía, se abrió la oportunidad de modificar tanto la forma como el fondo de un sistema político cuya vigencia histórica ya había concluido. Sin embargo, De la Madrid, Salinas y la coalición gobernante prefirieron resistir en su ciudadela autoritaria, confiando en que los resultados de la apertura económica y el ingreso masivo de capital externo los relegitimaría. Sin embargo, las cosas evolucionaron de manera distinta. Se perdió entonces la oportunidad de empezar a crear una nueva institucionalidad y cultura cívica -la democrática- que desestimulará la reacción

violenta de los opositores y ayudará a conducir las nuevas energías políticas que estaban emergiendo en México -el pluralismo- por causas pacíficas, legales y constructivos. A la "insurrección electoral" provocada por el Frente Democrático Nacional y por el PAN en 1988, la autoridad respondió con un gran fraude primero y poco después con la integración de una parte de esa oposición -la panista-, y la exclusión de la otra -la aglutinada dentro del recién creado PRD- y fraudes selectivos contra esta última. Esta política fue aplaudida por los "sensatos" tanto dentro como fuera de México, pues se consideró que no podía aceptarse que la "inconsciencia de los electores" abriera las puertas a un supuesto populismo que iba contra el interés general. A nadie dentro del *stablishment* pareció preocuparle que al frustrar el proyecto de una oposición encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y dispuesta a jugar el juego de los votos, se estaba volviendo a dar la razón y los incentivos a aquellos que ya en el pasado habían elegido el camino de las armas como la única forma de que el poder ya no volviera a exclamar: "ni los veo ni los oigo".

El Problema Actual. Hoy, cuando la clase política oficial y sus aliados han desbarrancado lo que apenas ayer presentaban como el mejor un proyecto nacional -la modernización de la economía mexicana por la vía de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, la inyección sin precedente histórico de capital externo, la concentración de recursos en unas cuantas empresas y un *boom* de exportaciones-, vuelven a aparecer aquellos

opositores que de manera contundente niegan la viabilidad de la nueva economía en función de los intereses de los más desprotegidos y, basados en su propia experiencia, no creen en el compromiso con la democracia de un discurso presidencial gastado ante tantos incumplimientos.

Una Salida. Es claro que si efectivamente ya hubiéramos transitado a un sistema político moderno, el reclamo de los armados resultaría ilegítimo y recibiría el rechazo abierto y activo de la enorme mayoría de la población, pero desafortunadamente ese no es el caso. Sin embargo, el EZLN ha manifestado de muy diversas formas y en repetidas ocasiones su propósito de desaparecer como movimiento armado en cuanto efectivamente se instales en México una democracia política real, sin partido de Estado ni trampas, y que sirva a indígenas, marginados y a los mexicanos en general, para decidir que proyecto económico y social verdaderamente desean y apoyan. La posición del EPR al respecto aún no es tan clara; el nuevo movimiento pareciera estar más cerca de la izquierda tradicional y dura que de una nueva y flexible. No importa, una transformación profunda de las reglas del juego político mexicano reduciría las razones en Guerrero, Hidalgo o en cualquier otra parte, para ver en el cañón del fusil la única salida hacia un futuro aceptable.

Es verdad que en los últimos años el voto ha sido parcialmente respetado y que la reforma electoral en puerta pudiera ampliar este panorama. Sin embargo, hasta hoy no se ha

dado en México una sola elección en condiciones de verdadera equidad. En estas circunstancias y para realmente desarmar al EZLN, al EPR y a los que pudieran aparecer en el futuro, no debería recurrirse a una nueva edición de la "guerra sucia" del pasado, sino a algo inédito: a la apertura real y definitiva de la vida política mexicana. Únicamente así se produciría el verdadero desarme de la insurgencia: el moral.